lo hubiera impuesto, atendiendo a lo preceptuado en el apartado 2 del artículo 219 del Reglamento de Gestión Urbanística, pero es necesario puntualizar que la iniciativa, tanto por lo que se refiere al Programa de Actuación Urbanística, como al Plan Parcial formado para su desarrollo, ha sido asumida, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto de 22 de junio de 1979, por el Instituto Nacional de Urbanización, Entidad que ha formulado los instrumentos de planeamiento y, por tanto, el Plan Parcial impugnado por el Ayuntamiento de Zaragoza, estando llevando a cabo el citado Instituto incluso la ejecución material de la obra urbanizadora comprensiva de las infraestructuras y dotaciones generales.

CONSIDERANDO 13.º: Que de conformidad con lo exigido en el artículo 48 del Reglamento de Planeamiento, el Plan Parcial verifica una asignación pormenorizada de usos, diferenciando los de destino público de los de destino privado, posibilitando la existencia del suelo destinado a espacios libres u otros usos con destino privado, lo que resulta congruente con lo señalado en el artículo 13 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y con el resto del articulado del texto reglamentario citado, como sucede con el artículo 52 en relación con el artículo 45 y con los artículos 7 y 11 de su anexo, siendo inadecuada la afirmación contenida en las alegaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, —por la indicada diferenciación de destinos del suelo objeto del planeamiento parcial y por las correlativas — aduciendo la inexistencia de contraprestaciones, ya que resulta difícil entender que alcance pretende darse a tal argumentación cuando se trata de una actuación urbanística de iniciativa pública, llevada a cabo por el sistema de expropiación, en la que el Instituto Nacional de Urbanización ha formado los instrumentos de planeamiento y está ejecutando la obra urbanizadora, de todo lo cual se deduce la inexistencia de desequilibrios que proporcionen beneficios a los propietarios del suelo que deban ser objeto de mayores contraprestaciones, ya que en este caso no pueden producirse beneficios de tal naturaleza, lo que, por otra parte, no impide que el planeamiento parcial contenga las reservas y dotaciones legalmente establecidas, como así sucede, y nada en contrario a esto se alega por el Ayuntamiento recurrente.

CONSIDERANDO 14.º: Que la estimación como excesiva de la altura de las edificaciones, mereció acogida por parte del Instituto Nacional de Urbanización y de la Comisión Central de Urbanismo, con reducción a 35 metros, limitación, a su vez, impuesta en la prescripción d) de las contenidas en el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial.

CONSIDERANDO 15.º: Que, en lo que puede denominarse segunda parte del recurso, el Ayuntamiento de Zaragoza muestra su preocupación por problemas medio ambientales y de transporte y, por lo que a los primeros se refiere, se limita a señalar una serie de recomendaciones o, si se quiere, advertencias, acerca del cumplimiento de la normativa vigente, sin definir lo que debe ser contenido propio del Plan Parcial y lo que ha de constituir las medidas correctoras de la instalación industrial, a imponer en la correspondiente licencia, cuando ésta se solicite con base a un Proyecto determinado, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, así como en las Disposiciones que lo han desarrollado.

CONSIDERANDO 16.º: Que, de la lectura de la documentación que integra el Programa de Actuación Urbanística y el Plan Parcial del Polígono «Entrerriós», se deduce la existencia de una regulación de cuanto puede afectar al medio ambiente, siendo ejemplo de ello los apartados 4.3 de la Memoria del Plan Parcial de la primera etapa y 1.11 de la Memoria del Plan Parcial de la denominada segunda etapa, donde se citan el conjunto de normas aplicables en materia de vertidos que necesariamente han de ser cumplidas, independientemente de su expresa acogida en el Plan Parcial.

CONSIDERANDO 17.º: Que otro tanto cabe decir acerca de la emisión de gases, ya que han de cumplirse las limitaciones de protección del ambiente atmosférico —Ley de 22 de diciembre de 1972, Decreto de 6 de febrero de 1975, Orden de 18 de octubre de 1976 y Real Decreto 795/1979, de 20 de marzo—, lo que es objeto de cita en el apartado 3.4.1. de la Memoria del Plan Parcial de la segunda etapa.

CONSIDERANDO 18.º: Que, por lo que a ruidos se refiere, el límite señalado en el apartado 3.4.3. de la Memoria del Plan Parcial de la denominada segunda etapa, se establece en 60 decibelios, inferior al límite fijado en la Ordenanza General de Higiene y Seguridad del Trabajo para la adopción de medidas especiales.

CONSIDERANDO 19.º: Que, respecto al vertido de residuos sólidos, habrá de estarse a lo dispuesto en la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre recogida y tratamiento de los deshe-

chos y residuos sólidos y urbanos, por ser esta norma de obligado cumplimiento.

CONSIDERANDO 20.º: Que, habiendo quedado reguladas en el planeamiento parcial todas las cuestiones de carácter general relativas a las materias citadas, las específicas, como ya se ha indicado, derivadas del Proyecto de la instalación industrial, habrán de ser objeto de posterior examen en el procedimiento establecido y regulado en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, por lo que mayores puntualizaciones en el Plan Parcial de las existentes constituiría una extralimitación, ya que el planeamiento no está referido a un Proyecto concreto y preexistente de instalación industrial y, aunque así fuese, no es propio del Plan Parcial analizar el proceso de fabricación y establecer las medidas correctoras, por ser otra la sistemática de nuestra legislación.

CONSIDERANDO 21.º: Que el texto reglamentario regulador de las denominadas «Actividades catalogadas», últimamente citado, también contiene determinaciones respecto a la depuración, contaminación de las aguas, producción de ruidos, límite de toxicidad, almacenamiento de productos inflamables, etc., lo que no es obstáculo para que en todo momento sea aplicable la legislación vigente, independientemente de su cita en el planeamiento parcial, por lo que resultan supérfluas las recomendaciones municipales expresadas en el recurso de reposición, a lo que cabe añadir que el Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, establece la constitución de una Ponencia Técnica cuyos miembros habrán de tener en cuenta «la legislación privativa de cada Departamento».

CONSIDERANDO 22.º: Que, cuanto se refiere a las comunicaciones, ha sido objeto de estudio, tanto en el Programa de Actuación Urbanística como en el Plan Parcial que se impugna, lo que se recoge en los apartados 1.3.3. de la Memoria del Programa de Actuación Urbanística 3.3 y 3.4 del Plan Parcial de la primera etapa y 1.9 del Plan Parcial de la segunda etapa, de cuyo contenido se deduce la suficiencia de las previsiones que en esta materia tienen tanto el Programa de Actuación Urbanística como el Plan Parcial impugnado.

CONSIDERANDO 23.º: Que de los artículos 47, 48 y 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se desprende la procedencia de estimar el recurso de reposición cuanto el acto impugnado infrinja el ordenamiento jurídico, incluso por desviación de poder, y si, por cuanto antecede, se llega a la conclusión de la inexistencia de tal infracción, resulta obligado desestimar el recurso de reposición interpuesto.

Por todo cuanto antecede el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón en su reunión del día 2 de septiembre, acuerda:

«Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno, adoptado en sesión de 13 de junio de 1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo, el Plan Parcial del denominado Polígono «Entrerriós», formado en desarrollo del Programa de Actuación Urbanística determinado en el Real Decreto 1.538/1979, de 22 de junio, que afecta a los términos municipales de Figueruelas, Pedrola y Grisén, en la provincia de Zaragoza, por estar el acuerdo impugnado plenamente ajustado a derecho».

**El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON**

DECRETO de 2 de septiembre de 1981, del Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, por el que acuerda desestimar el recurso de alzada interpuesto por D.ª Isabel Pérez Grasa y otro, contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, adoptado en sesión de 23 de julio de 1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo, la autorización de la instalación de un Centro Comercial de Carretera en Utebo.

VISTO el recurso de alzada interpuesto por D.ª Isabel Pérez Grasa y otro contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, adoptado en sesión de 23 de julio de 1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo, la autorización de la instalación de un Centro Comercial de Carretera en Utebo, provincia de Zaragoza.

RESULTANDO 1.º: Que, tras la aprobación previa, otorgada en sesión de 28 de marzo de 1980, y de la subsiguiente información pública, en la que comparecieron los ahora recurrentes, la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, aprobó, con carácter definitivo, la instalación de un Centro Comercial de Carretera en Utebo, a instancia de ese municipio

figurando como promotor la Sociedad Alcampo», S. A., habiéndose adoptado tal acuerdo en sesión de 23 de julio de 1980.

RESULTANDO 2.º: Que en el mencionado acuerdo de aprobación definitiva se estimaron, en parte, las alegaciones formuladas, lo que dio lugar al señalamiento de tres prescripciones.

RESULTANDO 3.º: Que en el considerando 12.º de la resolución recurrida se hizo constar que «en lo referente a la necesidad de implantación de la instalación en suelo rústico, se hace preciso manifiestar que existen aspectos técnicos, económicos y sociales y de conveniencia y oportunidad para los intereses municipales que han sido apreciados globalmente por el Ayuntamiento de Utebo y que han motivado la resolución de esta Comisión en el acuerdo de aprobación con carácter previo; sin que se hayan aportado, en la fase de alegaciones, otras razones o motivos contrarios que esta Comisión deba tomar en consideración».

RESULTANDO 4.º: Que, habiéndose verificado la notificación del acuerdo por correo certificado, conforme determina el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con señalamiento de recursos, D.ª Isabel Pérez Grasa y otro interpusieron recurso de alzada mediante escrito fechado el día 21 de agosto de 1980, que tuvo entrada en el Registro de la Comisión Provincial de Urbanismo el día 29 siguiente, bajo el número 139.

RESULTANDO 5.º: Que los recurrentes fundamentan la impugnación del acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza en la existencia de «inutilidad pública» o de «desinterés social» respecto a la instalación comercial autorizada, rechazando, asimismo, la necesidad de su ubicación en suelo rústico o no urbanizable; añadiendo, que se incumple la legislación urbanística respecto a la tramitación de la solicitud, al volumen máximo autorizable, al contenido documental del proyecto y a la propiedad del suelo.

RESULTANDO 6.º: Que se dio audiencia del precitado recurso al Ayuntamiento de Utebo, mediante escrito de la Conserjería del Departamento de Acción Territorial, fechado el día 1 de noviembre de 1980, sin que el citado Ayuntamiento haya formulado alegación alguna.

RESULTANDO 7.º: Que sometido el recurso de alzada interpuesto por D.ª Isabel Pérez Grasa y otro, a informe de la Asesoría Jurídica de este Ente Preautonómico, lo emitió con fecha 8 de mayo de 1981, indicando que el acto impugnado entraña una autorización de otorgamiento discrecional por parte de la Administración actuante, valorando la utilidad pública o el interés social de las instalaciones, llegando a la conclusión de que procede la desestimación del recurso de alzada.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 59, 60, 80, 114, 115, 122 y 123 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 85, 86, 179, 233 y 235 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, 44 y 45 del Reglamento de Gestión Urbanística, así como el Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.º: Que este Consejo de Gobierno es el órgano competente para resolver los recursos de alzada que se interpongan contra actos provenientes de las Comisiones Provinciales de Urbanismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, en relación con el Decreto 298/1979, de 26 de enero, y el Decreto de la Presidencia de esta Diputación General de Aragón de 7 de julio de 1980.

CONSIDERANDO 2.º: Que, por lo que a la forma se refiere, el recurso de alzada ha de entenderse correctamente formulado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 3.º: Que, asimismo, procede señalar que este recurso de alzada ha sido interpuesto dentro del plazo, legalmente establecido, puesto que, según disponen los artículos 59, 60, 80 y 122.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el plazo para la interposición del recurso, para quienes fueron objeto de notificación personal, será de quince días hábiles, siguientes al de la notificación del acto recurrido y, habiéndose practicado la notificación el día 19 de agosto de 1980, el plazo para la interposición del recurso finalizaba el día 5 de septiembre del mismo año, habiendo tenido entrada el escrito de recurso en el Registro de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza con anterioridad a esta fecha, lo que, a su vez, resulta conforme con lo establecido en el artículo 123 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 4.º: Que el artículo 235 de la Ley sobre el Régimen del Suelo establece que es pública la acción para exigir ante los órganos administrativos la observancia de la Legislación Urbanística y del Planeamiento, lo que produce, como consecuencia, el reconocimiento de la legitimación de los señores Pérez Grasa y Polo Blasco para recurrir en alzada, independientemente de la titularidad de un interés directo que

pueda quedar afectado con la implantación de la instalación comercial, interés que, por otra parte, no se alega ni se justifica, sin que se desprenda tampoco del contenido del recurso, para lo que es insuficiente la mera cita del artículo 113 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 5.º: Que la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza observó los cauces procedimentales establecidos para autorizar usos excepcionales en suelo rústico o no urbanizable, haciendo uso de la potestad discrecional que le otorgan los artículos 85 y 86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 y 45 del Reglamento de Gestión Urbanística, habiendo entendido esta Comisión Provincial la concurrencia en el supuesto sobre el que tuvo que decidir de un interés social, asumiendo la justificación dada por el Ayuntamiento de Utebo, y es precisamente este interés motivador del acto impugnado, el que, a su vez, posibilita el uso excepcional del suelo y la posterior concesión de la licencia municipal, según dispone el artículo 179 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, diferenciación admitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia en sentencia de 9 de junio de 1980 y que se desprende, además, del contenido del apartado 2 del artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística al no existir la aportación del Proyecto como requisito para admitir a trámite la solicitud de autorizaciones de usos excepcionales en suelo no urbanizable.

CONSIDERANDO 6.º: Que el interés social es un concepto jurídico indeterminado, en los supuestos en los que no se halle respaldado por la aplicación de la legislación específica, como señala el artículo 44.4 del Reglamento de Gestión Urbanística por la que la apreciación de su existencia ha de ser llevada a cabo por la Administración, sin perjuicio de su ulterior fiscalización, como lo hizo la Audiencia Territorial de Sevilla en sentencia de 5 de mayo de 1978 (número 181/1978, en recurso 178/1976) en la que se dice que «la aparición de esta novísima forma de mercado que es el Híper, su interés social se muestra muy patente, pues al vender más barato, satisface cumplidamente los intereses económicos de los consumidores, con la trascendencia que ello tiene en la sociedad de nuestros días, por lo que debido a esto goza dicha institución de un espléndido presente y futuro en nuestro país, solamente posible de lograr mediante dicha interpretación progresiva de la norma», justificando así el interés social y el emplazamiento de un Hipermercado en suelo rústico, criterio que tiene apoyo también en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, siendo muestra de ello la sentencia de 13 de febrero de 1979, cuyos principios informadores fueron recogidos en la de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 28 de abril de 1980.

CONSIDERANDO 7.º: Que la citada sentencia de la Audiencia Territorial de Sevilla, por lo que a la necesidad de ubicación en suelo rústico o no urbanizable de un Hipermercado se refiere, sustentó que «hay que tener en cuenta, que dado el elevado coste de los terrenos en las afueras de las grandes ciudades españolas, la cantidad adecuada de aquéllos que se precisa obtener, y la necesidad que tienen estos centros comerciales de no producir una excesiva repercusión de capital fijo sobre los precios de venta al consumidor, se ofrece como única solución la adquisición de terrenos rurales, para la instalación de los mismos, sin que sea obstáculo para ello el que el artículo 69 de la Ley del Suelo de 2 de mayo de 1975, establezca —para que pueda construirse en terreno rústico— que las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social hayan de emplazarse en el medio rural».

CONSIDERANDO 8.º: Que, como ya se ha indicado, la autorización otorgada se ha basado en los criterios ya expuestos, habiéndose cumplido con las exigencias procedimentales de nuestro ordenamiento jurídico —artículos 85 y 43 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión Urbanística— como reiteradamente vienen reconociendo las sentencias de primera instancia, de las que pueden citarse como ejemplo la de la Audiencia Territorial de Burgos de 15 de febrero de 1978 y la de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 13 de marzo de 1980.

CONSIDERANDO 9.º: Que aun cuando el acto recurrido exige la justificación por la Sociedad promotora de los derechos que posea sobre el terreno que pretende ocupar para accesos, el artículo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística exige tan sólo que se señale el emplazamiento y extensión de la finca en que se pretenda construir, reflejados en un plano de situación, sin hacer referencia a justificación de derechos que el solicitante de la autorización tenga sobre los terrenos, a lo que ha de añadirse que las cuestiones relativas a la volumetría y a la documentación del proyecto de edificación no han de ser consideradas en la autorización del uso excepcional, sino en el procedimiento que se instruya para la obtención de la licencia de edificación, cuestión ésta que, como anteriormente se ha reflejado, es de estricta competencia municipal, de todo

lo cual se deduce que no ha habido infracción de lo dispuesto en los artículos 85 de la Ley del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión Urbanística respecto a la documentación aportada con la solicitud de la autorización, sin entrar en el análisis, por la razón apuntada, de las limitaciones volumétricas.

CONSIDERANDO 10.º: Que de forma paralela a los criterios recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1979, pudiera entenderse que la autorización previa a la licencia municipal, exigida en el artículo 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo para usos excepcionales en suelo urbanizable no programado y, por remisión del artículo 86 de la misma Ley, en el suelo no urbanizable, tiene el carácter de un dictamen preceptivo y vinculante que ha de emitirse en un procedimiento bifásico, lo que haría inimpugnable directamente el acto trámite que este informe representaría, constituyendo las licencias municipales de actividad y de obras los actos definitivos susceptibles de impugnación.

CONSIDERANDO 11.º: Que, con base a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo, las alegaciones que fundamentan este recurso de alzada no justifican la existencia de una infracción del ordenamiento jurídico, incluyendo como motivo de tal infracción la desviación de poder.

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, en su reunión del día 2 de septiembre de 1981, acuerda:

«Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D.ª Isabel Pérez Grasa y otro, contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, adoptado en sesión de 23 de julio de 1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo, la autorización de la instalación de un Centro Comercial de Carretera en Utebo, por no infringir el acto impugnado el ordenamiento jurídico».

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

DECRETO de 2 de septiembre de 1981, del Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, por el que se acuerda desestimar el recurso de alzada interpuesto por el Instituto Nacional de Urbanización contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, de 30 de julio de 1980, por el que se aprobaron, con carácter definitivo, los Proyectos de accesos, abastecimiento de agua y saneamiento del Polígono "Entrerrios".

VISTO el recurso de alzada interpuesto por el Instituto Nacional de Urbanización, contra la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza de 30 de julio de 1980, por la que se aprobaron, con carácter definitivo, los Proyectos de accesos, abastecimiento de agua y saneamiento del Polígono «Entrerrios».

RESULTANDO 1.º: Que por el Instituto Nacional de Urbanización se procedió, en desarrollo del Plan Parcial, a la redacción de los Proyectos de accesos, abastecimientos de agua y saneamiento del denominado Polígono de «Entrerrios».

RESULTANDO 2.º: Que, tramitados por el citado Organismo, fueron remitidos a la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, a efectos de su aprobación definitiva.

RESULTANDO 3.º: Que en el período de información pública del proyecto de saneamiento el Ayuntamiento de Grisén formuló alegaciones indicando la conveniencia de que se construya un Complejo Deportivo, que incluya piscinas, para compensar los perjuicios que pueda causar la localización del emisario, alegación que fue informada por el Instituto Nacional de Urbanismo indicando que «el tema del Complejo Deportivo no tiene relación con el Proyecto que nos ocupa».

RESULTANDO 4.º: Que la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en sesión celebrada el día 30 de julio de 1980, acordó, con prescripciones, aprobar, con carácter definitivo, los mencionados Proyectos, figurando entre las mencionadas prescripciones la siguiente: «que se cumpla la prescripción establecida por la Diputación General de Aragón, en el acuerdo de aprobación del Plan Parcial, en el sentido de modificar el punto de vertido que se situaba por encima de las llamadas «Murallas de Grisén», llevándolo aguas abajo para no afectar a dicho paraje».

RESULTANDO 5.º: Que con fecha 27 de agosto de 1980 fue notificado el Instituto Nacional de Urbanización del precitado acuerdo de aprobación definitiva, con reproducción íntegra del texto y señalamiento de los recursos precedentes.

RESULTANDO 6.º: Que el Director General del Instituto Nacional de Urbanización, en escrito de fecha 10 de septiembre de 1980, certificado por el procedimiento señalado en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo el día 11 de los mismos mes y año, formuló recurso de alzada ante la Diputación General de Aragón, contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza de 30 de julio de 1980.

RESULTANDO 7.º: Que en el escrito de recurso se aduce la conformidad del Ayuntamiento de Grisén respecto a la localización del punto de vertido del efluente del río Jalón y que el Ente recurrente debe mantener conversaciones con el Ayuntamiento de Grisén entendiendo, finalmente, que ha de reiterarse el texto del acuerdo de aprobación definitiva respecto al punto de vertido del efluente.

RESULTANDO 8.º: Que por la Asesoría Jurídica de este Ente Preautonómico se emitió informe el día 8 de junio de 1981, indicando la necesidad de que se proceda a aclarar la fecha en que se practicó la notificación del acuerdo recurrido al Instituto Nacional de Urbanización, a fin de poder determinar si concurre o no extemporaneidad, aclaración efectuada por el Ente recurrente, a requerimiento del Consejero del Departamento de Acción Territorial y Urbanismo, señalando que la recepción en el Registro tuvo lugar el día 27 de agosto de 1980, bajo el número 5.375.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 113, 114, 115 y 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en los artículos 15 y 233 de la Ley del Suelo, y en los artículos 67 y 68 del Reglamento de Planeamiento así como en el Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, y demás disposiciones aplicables.

CONSIDERANDO 1.º: Que este Consejo de Gobierno es el órgano competente para resolver los recursos de alzada que se interpongan contra los actos provenientes de las Comisiones Provinciales de Urbanismo a tenor de lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley del Suelo, en relación con el Real Decreto 298/1979 de 26 de enero, y el Decreto de la Presidencia de esta Diputación General de Aragón de 7 de julio de 1980.

CONSIDERANDO 2.º: Que, por lo que a la forma se refiere, el recurso de alzada ha de entenderse correctamente formulado a efectos de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 3.º: Que en cuanto a su interposición dentro del plazo de quince días hábiles, siguientes al de la notificación, según determina el artículo 122.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, cabe plantearse la duda acerca de la fecha de recepción por el Ente recurrente, a la vista de los documentos que obran en el expediente, con la consecuencia de la extemporaneidad si la recepción se produjo el día 21 de agosto de 1980, pero acreditada la entrada en el Registro del Instituto Nacional de Urbanización el día 27 de agosto de 1980, ha de aplicarse el principio «in dubio pro actio» y, en consecuencia, entender interpuesto el recurso de alzada dentro del plazo legal.

CONSIDERANDO 4.º: Que el Instituto Nacional de Urbanización está legitimado para impugnar mediante la interposición de recurso de alzada el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, conforme previene el artículo 113 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 5.º: Que la motivación única del recurso se basa en la improcedencia de señalar como punto de vertido del emisario o efluente al río Jalón aguas abajo del paraje denominado Murallas de Grisén y tal determinación de la Comisión Provincial de Urbanismo al aprobar definitivamente el Proyecto de saneamiento del denominado polígono de «Entrerrios» es correcta y conforme con la prescripción señalada en los acuerdos de este Consejo de Gobierno de 23 de febrero y 13 de junio de 1980, por los que se aprobaron, con carácter definitivo, el Programa de Actuación y el Planeamiento Parcial del citado polígono, puesto que en estos acuerdos se indicaba la necesidad de modificar el punto de vertido al río Jalón «salvo conformidad del Ayuntamiento de Grisén», y tal conformidad no ha sido otorgada expresamente, ni puede deducirse del escrito de alegaciones del Ayuntamiento, ya que en él tan sólo se hace referencia a unas instalaciones deportivas que el Instituto Nacional de Urbanización no entra ni a considerar, y expresamente lo dice, en su informe, al mismo tiempo que en el escrito de recurso aduce que deberán mantenerse conversaciones con el Ayuntamiento de Grisén, de todo lo cual se deduce que ha de mantenerse la prescripción de las aprobaciones del Programa de Actuación Urbanística y del Planeamiento Parcial respecto al vertido y, consiguientemente, la impuesta por la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza al aprobar el Proyecto de Saneamiento, ahora impugnada, sin perjuicio de que se modifique el punto de vertido si se produjera la conformidad del Ayuntamiento de Grisén, hecho que el Ente recurrente no ha propiciado de forma satisfac-